



# **EL MOVIMIENTO SOCIAL ENTRE LAS TENAZAS DE LA POLÍTICA**

**Javier Ponce**

**Quito, abril de 2005**

## Í N D I C E

	<b>Página</b>
El movimiento social entre las tenazas de la política.....	3
La confianza en los gobiernos locales.....	3
Gutiérrez renace de las cenizas.....	5
Una larga historia de inconstitucionalidades.....	7
¿A quién le interesa la institucionalidad? ¿Cuánto interesa a la población el tema?.....	8
Las dos lecturas de la democracia.....	10
¿Un futuro populista?.....	11
El papel político del movimiento social.....	15
La confrontación con el TLC.....	19
Lo que enmascaran las cifras.....	21
Una conclusión.....	24

## **EL MOVIMIENTO SOCIAL ENTRE LAS TENAZAS DE LA POLÍTICA**

El trazado de una perspectiva política en el Ecuador es, ante todo, un ejercicio de imaginación. El analista difícilmente llega a superar el nivel del diagnóstico del presente, aplicando algunas categorías de análisis. Pero más allá de eso, confía particularmente en sus percepciones, en su olfato. Es más una aplicación de un tarot político que un proceso lógico. Particularmente en momentos como el actual, en el que se han extremado, en pocas semanas, rupturas institucionales que se venían arrastrando de años atrás, hasta alcanzar un callejón sin salida. A tal punto ha ocurrido la *vendetta* política, que cada acto del parlamento, del gobierno o de los partidos, debe ser mirado como una manera de saldar cuentas del pasado.

En las últimas semanas de 2004 se han condensado siete años de crisis institucional, desde la destitución del presidente Abdalá Bucaram. En un solo acto de dudosa constitucionalidad, una alianza de dos partidos populistas con el gobierno y sectores independientes (léase expulsados de sus respectivas tiendas políticas) destituyeron a los miembros de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, nombrando en su reemplazo simpatizantes o allegados de dichos partidos.

Y toda esa condensación ocurre en el espacio de un gobierno de por sí cuestionado, el del coronel Lucio Gutiérrez, sin identidad, sin rumbo, sin programa, que con el único afán de mantenerse y no caer, como ocurrió con los dos gobiernos precedentes (de Abdalá Bucaram y de Jamil Mahuad), abre indiscriminadamente el escenario del Estado para que se consuman rencillas y ambiciones represadas.

Mientras tanto, continúa profundizándose un modelo económico neoliberal sobre el que volveremos con precisiones más adelante, que aparece a primera vista como exitoso y lo "más coherente" del régimen, en la medida en que no es cuestionado por ninguna de las fuerzas políticas en pugna; y se ampara en una coyuntura económica favorable de precios altos del petróleo y apertura del mercado de capitales y de las fuentes de endeudamiento internacional.

### **La confianza en los gobiernos locales**

A pesar de las limitaciones que imponen las sorpresas y las incertidumbres, intentaremos atender a algunas preguntas básicas que permitan mirar con mayor realismo lo que puede significar la actual coyuntura política, para las dificultades y las oportunidades del devenir económico inmediato.

Pero antes dejemos señalados los dos hechos que marcaron la coyuntura política del segundo semestre de 2004 y los dos primeros meses de 2005: la realización de elecciones para renovar los gobiernos locales (municipios y prefecturas provinciales); y la polémica decisión del Congreso a la que hemos hecho referencia, una acción que ha radicalizado el conflicto político y ha puesto al país en los límites de la vigencia de la democracia.

En cuanto a la renovación de los gobiernos locales, podríamos formular cuatro tipos de observaciones:

1. En un buen número de jurisdicciones, fueron re-electos los alcaldes y prefectos en ejercicio, lo que significaría un fortalecimiento de algunos liderazgos locales con proyección nacional (los alcaldes de Quito -Paco Moncayo- y de Guayaquil -Jaime Nebot-, y de jurisdicciones regidas por miembros del partido auspiciado por el movimiento indígena Pachakutik).
2. A pesar de esas ratificaciones, es posible percibir el peso relativo de los partidos políticos que carecen de influencia nacional y que, incluso en las localidades en las que se imponen, actúan a la sombra de caudillismos o liderazgos más o menos independientes. Esta conclusión se sustenta en los altibajos que presentan las votaciones de estos partidos en comparación con elecciones similares anteriores.

Sin embargo, se puede destacar la consolidación de la socialdemócrata Izquierda Democrática en la región andina, particularmente con el triunfo amplio (más del 60% de los sufragios) en Quito y en la provincia de Pichincha, y la recuperación de regiones en las que había perdido influencia durante la última década, como el Azuay. En algunas regiones, la Izquierda Democrática actuó en alianza con Pachakutik, lo que plantea la presunción de una posible alianza de las dos fuerzas políticas en las elecciones generales de 2006.

3. Mientras, la derecha socialcristiana amplía su influencia en las provincias y ciudades de la Costa pero se debilita ligeramente en su bastión principal: Guayaquil, donde es reelecto Jaime Nebot, pero con una importante caída de su votación. Finalmente, el populismo parece vivir cambios de liderazgo, pues se debilita el partido dominante de esa tendencia, de Abdalá Bucaram, parcialmente en favor del socialcristianismo, pero también en función de un relevo populista, con una transferencia de votación a los candidatos auspiciados por el multimillonario Álvaro Noboa, que llegó segundo en la elección presidencial de 2002; y algo también a los candidatos auspiciados por el gobierno y personalmente por el presidente Gutiérrez, que entró en campaña electoral de manera directa, poniendo en riesgo incluso su escaso prestigio político.

4. La estabilidad de ciertos liderazgos reflejada en estas elecciones y los altos niveles de participación popular en las mismas, contrastan con la crisis política en el seno del Estado central -gobierno, parlamento, cúpulas de los partidos, cortes de justicia-, lo que inclina a los ciudadanos a reiterar su mayor confianza en los gobiernos locales. A este contraste se suma una vuelta a las presiones regionales por descentralización e incluso por autonomía, que aparecen como válvulas de escape para un conflicto político represado y que no encuentra fácilmente un punto de fuga, un desahogo. Sin duda, la descentralización, y más allá de ella, las autonomías con todas sus importantes consecuencias en el ordenamiento jurídico y político del país, aparecen como imágenes propicias para un país profundamente fragmentado y diverso, con vivencias culturales y modelos productivos y económicos distintos y con frecuencia neutralizados por el centralismo; un país que no ha contado, en momentos históricos, con otro factor de aglutinamiento que sus conflictos fronterizos, herencia de una historia colonial ambigua, y una historia republicana marcada por la disputa de intereses de grupos económicos y proyectos patrimonialistas.

### **Gutiérrez renace de las cenizas**

En efecto, luego del paréntesis a causa de las elecciones de octubre de 2004, el gobierno pasó por su momento de mayor angustia de los últimos dos años, colocándose al borde de la descalificación. Incluso una mayoría legislativa vigente hasta ese momento, se aprestaba, en noviembre, a descalificar a Gutiérrez.

El régimen que, hasta antes de las elecciones municipales, había vivido un prolongado proceso de enfriamiento de relaciones con su principal apoyo en el Congreso: el Partido Social Cristiano, mayoritario en el parlamento, se fue aislando para luego, *in extremis*, buscar respaldos en los partidos populistas con importante presencia parlamentaria. Por efecto de esta acción, la oposición conformada desde mediados del año 2004 por la alianza de tres fuerzas heterogéneas, el socialcristianismo, la Izquierda Democrática y Pachakutik, fracasó en el intento impulsado por el líder socialcristiano y figura emblemática de las casi tres últimas décadas de vida democrática, León Febres-Cordero, de enjuiciar a Gutiérrez. Esta alianza no contaba con la reacción que se produciría en pequeñas fuerzas parlamentarias marcadas por el resentimiento hacia los partidos grandes, particularmente dos de izquierda: el Partido Socialista y el Movimiento Popular Democrático de raíz histórica

maoísta, y en los diputados independientes o expulsados de sus partidos de origen y aglutinados en agrupaciones sui géneris.

Violentamente la correlación de fuerzas cambió, y una nueva mayoría parlamentaria favorable al gobierno se precipitó, en su afán de aprovechar el primer momento de euforia, a modificar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, violando la Constitución particularmente en el caso de la corte de justicia; y a colocar a sus militantes tanto en estos tribunales, como en la presidencia del Congreso y en las comisiones legislativas.

De un momento a otro, la histórica hegemonía socialcristiana en los tres tribunales se esfumó, al tiempo que el país ingresaba en un limbo constitucional, un vacío institucional, agitado por el regreso al país de Abdalá Bucaram y su estilo agresivo y espectacular de ejercer el discurso político, una vez que la Corte Suprema elegida por la nueva mayoría archivó los juicios en su contra. Una decisión de la Corte que favoreció a otros dos personajes, pero sin mayor incidencia en la coyuntura política actual: el ex vicepresidente Alberto Dahik acusado en 1995 de manejos arbitrarios de gastos reservados del gobierno, y el ex presidente Gustavo Noboa acusado por perjuicio al Estado en la última renegociación de la deuda externa ecuatoriana ocurrida en el año 2002. Tres acusados, Bucaram, Dahik y Noboa, que fugaron del país en momentos en que se instalaban juicios en su contra.

A partir de esta sorpresiva y perentoria resurrección de Lucio Gutiérrez, y de la presencia dominante en su gobierno de los dos partidos populistas, con sus líderes Abdalá Bucaram y Álvaro Noboa, el Ecuador vive un estado de agitación política constante, de sucesivas escaramuzas entre oficialistas y opositores, de frecuentes actos de retaliación oficial contra miembros de la oposición, lo que ha llevado a ésta a hablar de la existencia de una dictadura por parte de Gutiérrez. Más aún, la propia mayoría gobiernista, cumplido el propósito de derrotar a Febres-Cordero con los cambios en las cortes, se ha disuelto y comienza a vivir enfrentamientos a su interior, en busca de “posesionarse” frente al futuro electoral.

A partir de estos cambios en los poderes del Estado, el régimen se encamina hacia una forma desordenada y primitiva de autoritarismo y de concentración del poder, que ha creado un ambiente de inseguridad, marcado por actos que van desde periodistas perseguidos por el régimen, hasta fundaciones privadas intervenidas sin fundamento legal, pasando por líderes sociales que son física o psicológicamente agredidos o asediados. En respuesta, manifestaciones multitudinarias en Guayaquil, Quito y Cuenca, organizadas por la oposición, han trasladado a la calle la confrontación política y amenazan directamente a la estabilidad de Gutiérrez.

De todos modos, las posiciones en el Congreso son tan frágiles, están sujetas de tal modo al clientelismo y las prebendas ofrecidas por el régimen, se muestran tan confusas en las filas de la propia mayoría que trastornó el marco institucional, que todas las mañanas el país amanece con el anuncio de un realineamiento de las fuerzas políticas.

## **Una larga historia de inconstitucionalidades**

Así las cosas, busquemos en el análisis algunos elementos que permitan entender -no justificar- lo ocurrido en estos últimos meses, y sus proyecciones para el futuro político.

La primera observación es que los actos al margen de la Constitución ocurridos en diciembre de 2004, no son nuevos; se remontan a 1997, cuando el Congreso Nacional destituyó al presidente Abdalá Bucaram bajo el argumento de "locura" y marginó arbitrariamente a su sucesora constitucional, la vicepresidenta Rosalía Arteaga, para dar paso a una salida negociada al margen de la legalidad. Luego vendrían: la dolarización anticonstitucional con la desaparición de la moneda nacional, la destitución mediante un golpe de estado del régimen de Jamil Mahuad, y el traspaso del poder a su vicepresidente realizado no por el parlamento en cumplimiento de la Constitución sino por el alto mando militar en una noche confusa de pugnas políticas; irregularidades a las que se suma el control ejercido desde la década pasada, por un partido político, el socialcristianismo, sobre todos los órganos del Estado: Tribunal Constitucional, Cortes de Justicia, Tribunal Electoral, Fiscalía, "politizando" en extremo estas funciones estatales.

La reacción a este control hegemónico de los poderes del Estado, fue la ruptura institucional de diciembre de 2004, que ya abordamos, por parte de partidos y sectores que se han visto excluidos del anterior reparto del poder.

No existen motivos para pensar que en los próximos meses la situación política viva un cambio radical en función de volver a la situación de legalidad anterior al 8 de diciembre de 2004, en lo que respecta a los tribunales de justicia. La demanda generalizada de una despolitización de la justicia no tiene visos de concretarse, y la posibilidad de que la oposición, conjuntamente con un régimen de Gutiérrez arrepentido de lo actuado en diciembre, cambie a la actual Corte Suprema de Justicia, tildada de "inconstitucional", no está aún clara.

Por lo demás, es previsible que Lucio Gutiérrez continúe moviéndose sin eje ni sentido, de extremos de autoritarismo a muestras de profunda debilidad.

Los cambios de ministros de Gobierno, seis en los dos años que van del régimen, han marcado precisamente sorprendidos e improvisados giros de estrategia en la conducción de la política. Gutiérrez mantendrá un ambiente de confrontación verbal violenta con sus opositores, porque aquello es lo único que le ayuda a mantener a flote su figura, pero buscando simultáneamente tomar distancia de los enfrentamientos directos "encargados" a funcionarios subalternos, e incluso mostrándose conciliador luego de cometidos los desafueros. Me parece que la oposición ha buscado con tanta intensidad su derrocamiento, que ha acabado paradójicamente por fortalecerlo; y ha multiplicado las denuncias de corrupción hasta saturarlas y anularlas.

En cuanto al Congreso, lo que vayamos a vivir en este año 2005, no será muy distinto a lo vivido en los dos años anteriores: un limbo político al que le sucede la confrontación, la que a su vez alcanza un desenlace perentorio y violento, para finalmente abrir un nuevo limbo político.

A pesar de la enorme respuesta alcanzada por las convocatorias a las movilizaciones de enero, febrero y marzo de 2005 en Guayaquil, Quito y Cuenca, por parte de la oposición, y del hecho inédito de que decenas de miles de ciudadanos se hayan movilizado en más de una ocasión en torno a una consigna un tanto abstracta -la defensa de las instituciones democráticas-, el intento por recuperar la institucionalidad del país y cambiar la Corte de Justicia, puede diluirse en estos meses de 2005, y desembocar en una tortuosa negociación entre gobierno y oposición, que se difumine en los ambientes pre-electorales de la elección presidencial de 2006.

### **¿A quién le interesa la institucionalidad? ¿Cuánto interesa a la población el tema?**

La institucionalidad y la seguridad jurídica no son fácilmente vistas como un beneficio por parte de una mayoría de la sociedad ecuatoriana, obligada a funcionar al margen de una siempre débil institucionalidad. Entre otras razones, porque las instituciones del Estado significan algún beneficio al ciudadano únicamente cuando están mediatizadas por el clientelismo, la existencia de un padrino o el uso de un intermediario.

En síntesis, la mayoría de la población resuelve sus problemas, ya sea al margen de la institucionalidad y la normatividad jurídica, o en conflicto con ellas.

Esto no significa que se pueda prescindir de la institucionalidad y la normatividad, ni mucho menos. Únicamente constatamos un hecho: la población posiblemente se expresa a favor de la democracia cuando se le pregunta sobre la conveniencia de mantenerla, pero al momento de establecer un balance de su situación y perspectivas personales, la democracia y la institucionalidad no aparecerán en el análisis.

Basta ver un noticiero de televisión para entender esta lectura fracturada que hacemos de nuestra realidad. El primer segmento se refiere a los conflictos en las élites políticas presentados a partir de un “deber ser”, por lo que los hechos políticos aparecen como expresiones de una ausencia de auténtica democracia y cultura política. Hay un metalenguaje implícito, en el que se subrayan las pugnas de poder, las pugnas internas del parlamento, las polémicas entre un sector de diputados y el régimen, las contradicciones al interior del discurso oficial.

En un segundo segmento del noticiero televisado, están los conflictos de la gente: las angustias de los familiares de los emigrantes frente a la necesidad de acogerse en estos primeros meses del año 2005 a la regularización de sus parientes en España; las marchas de los jubilados; los enfrentamientos de los comerciantes informales con la policía municipal de Guayaquil; las amenazas de huelgas en el sector público. Los dos tipos de conflictos no tienen, en la pantalla de televisión, más articulador que los espacios publicitarios que enlazan un fragmento con otro, con lo que la fractura entre la política y la presencia caótica de los distintos segmentos sociales, se vuelve alucinante, insólita, acumula más ruptura y fragmentación.

Parecería que, desde el retorno democrático de 1979, nos empeñáramos por ajustar la realidad a un modelo del comportamiento moderno de una democracia. Por tanto, ha ocurrido que nos hemos pasado 25 años reproduciendo el permanente conflicto, insoluble por lo demás, entre la exaltación retórica de la institucionalidad y la existencia real de una desinstitucionalización profunda. Y mientras se exige un comportamiento sustentado en normas e instituciones que rijan por igual para todos los actores sociales, la realidad no nos demuestra un proceso ascendente de adopción de esos comportamientos y esa institucionalidad, menos aún de sus beneficios en términos de equidad y justicia. Incluso podríamos hablar de que algunos esfuerzos de institucionalización y de impulsar ciertas políticas de Estado, no han venido desde la vertiente de los partidos y de su ejercicio del poder, sino desde organizaciones civiles en apoyo a movimientos sociales.

No existe un acceso democrático directo al beneficio de la institucionalidad. Ese acceso está mediatizado, ya lo dijimos, ya sea por la cercanía de algunos sectores al poder o por la simple y llana acción de la corrupción, que se ha vuelto funcional a la vida cotidiana de los ecuatorianos. No hay nostalgia por la constitucionalidad de los actos públicos. La corrupción los mediatiza, la

corrupción y no los representantes elegidos es el vínculo entre los ciudadanos y el Estado.

## **Las dos lecturas de la democracia**

Al margen de cualquier juicio de valor, la diferencia entre encontrar este momento posibles salidas o no encontrar ninguna, depende de que pensemos a la cultura política como es en realidad, tal como existe en el país, como un obstáculo, o que en su defecto, la imaginemos como algo que debe quedar atrás, que debe superarse por principio.

Si la consideramos desde el “deber ser” como un obstáculo, nuestra lectura y nuestros objetivos serán unos. Si la consideramos como una especificidad con la que hay que contar y de la que hay que partir, la lectura será otra.

O miramos la cultura política en sí, tal como es, o la observamos desde la perspectiva de cómo nos imaginamos una democracia moderna. En el primer caso, estamos frente a la presencia de un hecho; en el segundo caso, frente a la ausencia de un hecho. Y el tratamiento será necesariamente diferente según dónde nos coloquemos.

Esta visión de la realidad como ausencia, como carencia, provoca, según afirma el analista Franklin Ramírez, que "ante nuestros ojos, la cultura política aparezca como una suerte de agujero negro: todas sus cualidades son definidas en términos negativos, en el ámbito de las carencias, de las ausencias, de los bloqueos, de las fracturas"<sup>1</sup>.

Por otra parte, la volátil realidad de la política que hemos vivido en los últimos meses, está en el corazón mismo de la sociedad ecuatoriana. El comportamiento del parlamento responde a una cadena de comportamientos que se inician en la base del proceso de elección de la representación política.

Por ejemplo, si hablamos de mayorías volátiles en el Congreso, que se cambian de partido por cualquier ofrecimiento gubernamental, aquello nos remite a tendencias políticas volátiles y a fidelidades volátiles en los electores. Si hablamos de diputados comprados por un régimen, nos toca hablar antes de candidatos a diputados comprados por los partidos, que los llevan al parlamento para engrosar su bloque, sin una historia partidista por detrás. Si

---

<sup>1</sup> Franklin Ramírez, *Explorando en un agujero negro. Apuntes para una crítica de las visiones dominantes sobre cultura política en el Ecuador*, en: *Democracia, gobernabilidad y cultura política*, Flacso-Ecuador, Quito, 2003.

nos referimos a legisladores que buscan captar favores del régimen, es porque han sido elegidos por electores que esperan alcanzar beneficios a través de ellos.

Cómo, entonces, podemos reclamar consistencias ideológicas o gobernabilidad en medio de la vigencia de un sistema político patrimonialista, marcado por las injusticias sociales; un sistema en el cual el acceso a los servicios del Estado está mediatizado por el clientelismo. Esa es la raíz del éxito de los populismos, que son mucho más funcionales al país político que los partidos ideológicos e institucionalizados. Y los populismos medran y se alimentan de las tensiones entre institucionalidad y pueblo, favoreciendo corrientes de oposición política sustentadas en el prurito de la oposición por la oposición, algo que puede producirse sólo en una sociedad constantemente expuesta al descontento, a la pobreza, capitalizada por los populismos.

De este modo, cuando el tema del Tratado de Libre Comercio entre los países andinos y Estados Unidos supere el escenario actual de la negociación entre negociadores individuales y que se reúnen en ámbitos, si no secretos, sí indescifrables para la mayoría de ecuatorianos, y pase al escenario político del parlamento, llegaremos a un punto de quiebre entre las manifestaciones de la cultura política real y los deseos de modernizar al país desde la voluntad de las élites.

### **¿Un futuro populista?**

Siempre en el marco de la necesidad de recurrir a la imaginación y a las intuiciones para prever los virajes que pueda sufrir la política en los próximos meses, podemos preguntarnos si a los integrantes de la actual mayoría del Congreso les unen lazos que puedan tener algún grado de perdurabilidad o estamos frente a una mayoría ocasional que puede desmoronarse en cualquier momento.

Existen algunas razones que explican esta confluencia de los populismos, y la influencia que pueden tener en el futuro inmediato e incluso mediato del país:

1. La alianza entre el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, comandado por Abdalá Bucaram y el Partido Renovador Institucionalista, PRIAN, creado por el multimillonario Álvaro Noboa, ocurrida en el marco de la conformación de la nueva mayoría parlamentaria gobiernista, tiene antecedentes. Álvaro Noboa fue presidente de la Junta Monetaria en el gobierno de Bucaram y entró a la escena política a partir de esa vinculación. Posteriormente, en 1998, el PRIAN estableció con el PRE

una alianza electoral abierta y exitosa, pues proyectó a Noboa a la segunda vuelta electoral. Finalmente, en las elecciones presidenciales de 2002, el PRE creyó necesario probar sus propias fuerzas y perdió, pero mantuvo durante la segunda vuelta electoral una actitud ambigua, cruzada por contactos y supuestos compromisos con Lucio Gutiérrez, pero sin enfrentar de manera radical a Álvaro Noboa, con lo cual mantuvo abiertas las puertas tanto al uno como al otro; para finalmente confluír los dos, el PRE y el PRIAN, en una alianza con Gutiérrez a partir de diciembre de 2004.

2. A pesar de que Abdalá Bucaram y Álvaro Noboa estén lanzándose dardos el uno al otro, como si se tratase de enemigos irreconciliables, tanto el PRE como el PRIAN tienen un enemigo común en el Partido Social Cristiano y en su líder histórico: el ex presidente León Febres-Cordero. Para los dos es importante, en la disputa del escenario político de la costa y particularmente de Guayaquil, la muerte política de Febres-Cordero, como paso previo a una eventual disputa de ese mismo electorado entre los dos, el PRE y el PRIAN. Se trata, en este caso, no de una persecución personal, sino de un cálculo político fundado en que "el PSC (Partido Social Cristiano) se ha convertido (si alguna vez fue otra cosa) en una organización patrimonialista, donde el poder personal y privado del dirigente es inseparable del de la organización"<sup>2</sup>.
3. Los populistas deben haber observado que en las elecciones últimas para renovar los gobiernos seccionales en octubre del año pasado, se evidenciaron dos hechos: el debilitamiento del PRE en algunos nichos tradicionalmente suyos en Esmeraldas, Machala y Manabí, lo que le puede llevar a Bucaram a meditar muy bien la conveniencia de lanzarse a una candidatura presidencial; y otro hecho: la caída de la popularidad de Jaime Nebot, heredero político de Febres-Cordero, que descendió de algo más del 70 por ciento de la votación alcanzada en el año 2000, a algo menos del 60 por ciento en las elecciones de 2004, en provecho de un candidato roldosista surgido de fuera del partido de Bucaram, pero que entró segundo en la contienda con un importante 30 por ciento, y una candidata prianista que llegó tercera. Mientras el primer hecho puede abonar a una eventual alianza electoral futura entre el PRE y el PRIAN, el segundo hecho abriga las esperanzas de que es posible disputarle al socialcristianismo sin Febres-Cordero, el escenario de Guayaquil.
4. Por otra parte, el ingreso a la segunda vuelta electoral de dos candidatos con estilos y perfiles populistas: Noboa y Gutiérrez, demuestra que el populismo no está derrotado en el Ecuador. Y el antifebrescorderismo ha sido, durante este período democrático de dos décadas y media, un

---

<sup>2</sup> Fernando Bustamente, *Historia de una acusación*, en: Ecuador Debate 63, diciembre 2004, Quito.

factor que ha alimentado la fuente electoral del populismo. La confrontación maniquea de pobres y ricos, de oligarquías y pueblo, de marginados e incluidos, de informales y formales, de élites institucionalizadas y masas excluidas sometidas a una sobrevivencia irracional, han sido aprovechadas por el populismo y están en plena vigencia, a tal punto que es el único discurso levantado por el presidente Gutiérrez este momento y el que le permitió recuperar su imagen de manera fugaz, llegando a contar con un importante 32 por ciento de adhesiones, de acuerdo a encuestas independientes realizadas en marzo de 2005; incluso la condición de Álvaro Noboa como el empresario más rico del país (lo que podría perjudicarlo) ha sido sobrellevada con un bajo perfil que no ha perjudicado al Noboa político.

5. Una vez derrotado Febres-Cordero, el PRE y el PRIAN volverán la mirada sobre las próximas elecciones y sobre el mismo electorado en el que se asientan por igual los dos populistas; y allí es posible aventurar una hipótesis para las elecciones de 2006: Noboa considera que el poder está demasiado cerca como para renunciar a él, mientras Bucaram, cuyos derroteros han sido siempre impredecibles, puede calcular el peligro de un fracaso electoral y considerar que más beneficios para su protagonismo político puede traerle el controlar importantes segmentos del Estado desde fuera del poder. Esto favorecería una alianza electoral entre los dos líderes. Por lo demás, tanto al PRE como al PRIAN les conviene un fortalecimiento de Sociedad Patriótica, partido de Lucio Gutiérrez, para una alianza en el 2006, a riesgo incluso que una alianza con Gutiérrez pueda significar arrastrar con el desencanto que dejará el régimen como herencia; sin descartar, tampoco, que Gutiérrez pretenda continuar en el poder él mismo o uno de los suyos.

De todos modos, Gutiérrez es también, para Bucaram y Noboa, un pretexto para avanzar en sus proyectos de futuro, y el actual mandatario bien puede quedarse en el camino.

Junto a la alianza parlamentaria PRE/PRIAN están también los intereses evidentes del gobierno de Gutiérrez: para su equipo político (es preferible hablar de equipo por las pocas luces intelectuales que demuestra poseer personalmente el presidente) era evidente que el silencioso apoyo inicial del socialcristianismo resultaba endeble, no acababa de consolidarse, dependía de las ventajas que podía obtener el entorno voraz de Febres-Cordero, controlando espacios estatales de importancia económica como los contratos petroleros. Por tanto, el régimen dejó flotando la posibilidad de una alianza con Bucaram y con Álvaro Noboa, sobre la base de un interés común de los dos: la necesidad de contar con influencias en los poderes del Estado.

Por lo demás, Gutiérrez sabía que, una vez fracasado el juicio político en su contra (intento que había sido ideado por Febres-Cordero), existía la posibilidad de que fuera perseguido por otros medios, con el apoyo de los legisladores más radicales de la Izquierda Democrática, lo que le obligaba a controlar no sólo el Congreso sino el Tribunal Constitucional y la Corte de Justicia. Por su parte, Bucaram necesitaba también de un cambio en las cortes para diluir los juicios en su contra, que le han obligado a permanecer en Panamá para no ir preso; y Álvaro Noboa, obsesionado por la idea de haber sido víctima del fraude en 1998 y 2002, buscaba controlar el Tribunal Electoral.

A ellos era fácil sumar el conjunto de independientes movidos por intereses particulares que pueden ser satisfechos únicamente desde el gobierno.

Quedaban dos pequeños partidos de izquierda: el MPD y el socialismo. Para el primero, el haberse alineado, por lo menos en los dos últimos procesos electorales -las elecciones de Gutiérrez y Paco Moncayo- en la misma alianza en la que estaba Pachakutik, sólo le significó quedarse de convidado de tercer orden: minimizado en el gobierno de Gutiérrez y perdiendo la única concejalía que poseía en Quito; había, entonces, que buscar un andarivel en el que Pachakutik no estuviera, para intentar retomar el protagonismo de la izquierda que lo perdió en 1996 con la exitosa irrupción del movimiento indígena en el escenario de la contienda democrática. Igual intento por recuperar el protagonismo de izquierda alimentaría el socialismo, porque en la izquierda parlamentaria ecuatoriana ha sido costumbre que se turne el protagonismo entre varias tiendas políticas.

Si a todo ello se suma el hecho de que las instituciones del Estado siguen siendo los mayores acumuladores de recursos económicos -basta pensar en el petróleo y en el Seguro Social- es posible suponer que los beneficios económicos de estar en el poder justifican el interés de las alianzas por más allá de los cambios en el Tribunal Electoral y la Corte Suprema, con extensión a otros niveles de los tribunales de justicia y electorales.

Estamos en un atolladero. La única legitimidad la tienen los elegidos en las urnas, los legisladores, que han trastocado la legalidad. La única respuesta con cierto efecto, puede venir de una sociedad civil que defiende la legalidad pero que, sin embargo, cuenta con una legitimidad que no tiene más sustento que la propia voluntad de ser representantes de la sociedad civil.

En un escenario tan confuso, es posible que la inestabilidad jurídica se prolongue hasta las próximas elecciones de fines del 2006. Estas hipótesis van atadas a una doble inseguridad: la que siembran los propios actores políticos; y la incertidumbre sobre el desarrollo que pueda vivir un conjunto de conflictos sociales que se van agudizando y que, no lo descartamos, pueden confluir en un momento determinado y volverse como un aluvión contra el

régimen de Gutiérrez. Ocurrió en febrero de 1997 contra Bucaram, ocurrió en enero de 2000 contra Mahuad.

Pero si el equipo de gobierno capea las situaciones críticas, creadas con frecuencia por las propias torpezas presidenciales, contando para el efecto con el respaldo que le han prestado las Fuerzas Armadas y el más o menos velado apoyo del gobierno norteamericano, y si la alianza de los populismos persiste con miras a la próxima contienda electoral, podríamos estar asistiendo a un confrontación electoral entre esa alianza y una que se produzca entre los dos partidos más institucionalizados: el socialcristianismo y la Izquierda Democrática; algo que resulta ideológicamente "cuesta arriba", pero que puede ocurrir forzado por las circunstancias. El pragmatismo político puede sobreponerse a las diferencias históricas; y la retórica justificar elasticidades ideológicas para caminar hacia una posición de centro, a nombre de salvar al país del populismo que representaría un congelamiento del país en el pasado.

### **El papel político del movimiento social**

El analista al que citamos en líneas anteriores, Franklin Ramírez, establece la existencia de dos niveles: el de *la política* para referirse a los actores políticos, a los partidos y sus líderes y caciques en el poder o en la oposición; y *lo político*, en forma más genérica, para referirse a las formas de participación o de ausencia de participación de la población en el marco de una cultura política. Si aplicamos esta diferenciación a lo que pueda ocurrir en el 2005, encontraremos:

- La relación entre estos dos niveles, en cuanto al control del poder en el futuro inmediato y el que pueda sobrevenir a partir de las próximas elecciones, relación en la que el populismo está un paso adelante.
- El peligro de que se profundice la tendencia neoliberal en la economía del país, imponiéndose con bastante autonomía y con la complicidad del régimen.
- La política actuando desordenada y peligrosamente. Lo político marcado por un vacío de un programa popular. Simultáneamente, un movimiento social dividido con respecto al modo de afrontar la crisis del sistema político, y congelado por la situación dramática del conflicto dentro de la cúpula estatal. Por tanto, la coyuntura que hemos descrito, tiene un peso específico sobre el desarrollo del movimiento social que no puede actuar por fuera de esa coyuntura.

Para el movimiento social podrían vislumbrarse dos campos de acción:

- a) Exigir, en el marco de la crisis, un proceso de reforma política que no afecte exclusivamente a las formas de la institucionalidad, sino que busque afectar a las culturas políticas, desarrollarlas en términos de construir democracias que respondan a las necesidades de la población y a su participación; pero aquello exige fortalecer a esos sectores civiles, y entender que la institucionalidad, la legalidad y la democracia van a surgir del fondo de la cultura política que por hoy es pasto del populismo. Corresponde a esos sectores actuar desde esa cultura política, encontrar sus virtualidades, desarrollarla en función de alcanzar mayor justicia económica y social en nuestra sociedad. Difícilmente avanzaremos si nos planteamos el comportamiento popular que favorece por el momento al populismo, como una rémora, como una carencia en sí misma, como una pesada culpa con la cual azotarnos.
- b) Proyectar su lucha frente a amenazas graves que se ciernen sobre el país este momento: las reformas legales que afectan al control estatal sobre el Seguro Social (lo que no significa ocultar o justificar su estado calamitoso actual sino encontrar alternativas), sobre las empresas eléctricas y sobre un segmento de la producción petrolera; la eventualidad de un Tratado de Libre Comercio, TLC, actualmente en negociación; y la profundización del Plan Colombia.

Y esta aproximación a las posibilidades de acción del movimiento social, nos lleva a desarrollar alguna observación sobre su situación, en esta coyuntura en la que ha estado ausente, quizás debido al momento electoral de octubre de 2004 al que nos hemos referido, y al vértigo de los acontecimientos políticos que ha arrastrado a los partidos de izquierda.

El movimiento social no se expresa por ninguna parte. Lo más destacado es, sin duda, el proceso de reorganización interna del movimiento indígena en su expresión mayor: la CONAIE; y las movilizaciones que en su defensa puedan surgir, frente a las intenciones del régimen de Gutiérrez de crear una confederación indígena paralela.

Antecedido de un confuso congreso de la confederación amazónica, CONFENIAE, en medio de mutuas acusaciones y formación de fracciones distintas, el congreso de la CONAIE de comienzos del año 2005 se presentaba crucial en la redefinición del movimiento frente al gobierno y a las distintas fuerzas políticas. Finalmente, se despejó cualquier peligro de intervención gubernamental para dividir al movimiento, y éste escogió a un líder histórico de prestigio, Luis Macas, para presidir la organización. Esta elección ha sido considerada como una renovación del proyecto político indígena y la posibilidad de recuperar la unidad desde las organizaciones de base.

Macas inició su gestión tomando distancia de las fuerzas políticas en conflicto. Sin embargo, el alineamiento en el parlamento del partido que representa la propuesta indígena, Pachakutik, con la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, debilita esa posición, al tiempo que empuja a las organizaciones sociales a tomar posición en la confrontación entre parlamento y gobierno, con pocas posibilidades de defender una línea independiente.

Por otra parte, ocupadas las centrales sindicales en discutir mínimos incrementos salariales para este año, y el movimiento indígena en recuperarse internamente luego del paso por el gobierno de Gutiérrez y de los altibajos de su participación en las elecciones de gobiernos locales (conservó su nivel de influencia ganando algunas alcaldías, pero perdiendo otras muy significativas como las de algunas áreas indígenas en Chimborazo y Cotopaxi), el movimiento social en su conjunto se ha mantenido inactivo. Apenas algunos sectores se han manifestado, con debilidad, sobre la necesidad de oponerse al TLC, y han iniciado una campaña para convocar a una consulta popular al respecto.

Si este momento la CONAIE está preocupada por curar las heridas que ha soportado desde el levantamiento de enero de 2000, que desembocó en la caída de Jamil Mahuad gracias al apoyo militar (con Gutiérrez a la cabeza), y Pachakutik se encuentra ocupada exclusivamente en fortalecerse sumándose a la oposición socialcristiana y socialdemócrata, se perfilan en el futuro inmediato dos causas ya señaladas, y que pueden reanimar la movilización popular: el debate sobre el TLC y sobre el paquete de medidas económicas neoliberales que el gobierno de Gutiérrez se apresta a introducir en el Congreso en los próximos meses.

Si buscáramos establecer una síntesis que caracterice el comportamiento de las demandas y presiones sociales y gremiales encontraríamos que:

- Buena parte de la conflictividad social de los últimos meses de 2004, tal como lo expresa el informe de coyuntura de la revista Ecuador Debate en su número 63, correspondiente a diciembre 2004, se explica por la etapa pre-electoral de las elecciones de los gobiernos locales el mes de octubre de 2004. Allí se reaniman demandas ligadas a la efervescencia electoral y al clientelismo político, pero se diluyen en el escenario post-electoral.
- La conflictividad ha estado estrechamente vinculada a los incumplimientos del régimen de Gutiérrez. En efecto, su gobierno se ha caracterizado por desactivar los conflictos en el terreno de la ficción y la espectacularidad, postergando las soluciones efectivas. Tomemos cuatro ejemplos: las demandas de incrementos salariales presentadas por el gremio de los trabajadores y médicos de los hospitales públicos

casi a inicios del gobierno, se postergaron con el ofrecimiento del propio mandatario de solucionar el tema en el plazo de un mes; sin embargo, han pasado más de dos años y vuelve a renacer el mismo conflicto con las mismas demandas por incumplimiento del régimen. El anuncio inconsulto del presidente de una homologación casi inmediata de los salarios de los empleados públicos nunca se cumplió generando el reclamo de los trabajadores, que han recibido como respuesta el anuncio de cinco mil cancelaciones a ser aplicadas escalonadamente en los próximos tres años, con lo que se ha alimentado la inseguridad y el malestar en el sector. El incumplimiento de los acuerdos a los que se llegó luego de una valiente y sostenida lucha de los jubilados del Seguro Social ha provocado que este sector se mantenga permanentemente movilizado. Finalmente, ante el fracaso del plan de obras viales en la Amazonía proclamado por Gutiérrez, éste lo enfrentó en su visita a la región destituyendo en un acto teatral e histriónico al ministro de Obras Públicas, con lo que la demanda de las obras quedó sin una respuesta real.

- La incapacidad del régimen por aplicar respuestas efectivas a los conflictos, está generando que éstos sean resueltos en medio del desorden y el caos. El último fue el ocurrido con el transporte en la ciudad de Guayaquil. El gobierno anunció la eliminación del sistema de "torniquetes", un implemento mecánico colocado en el ingreso a los autobuses para registrar el número de pasajeros, que fue demandado como inhumano y violatorio a sus derechos por parte de los discapacitados y los ancianos y niños; como el gobierno no supo aplicar la medida, grupos de jóvenes y de discapacitados comenzaron a actuar violentamente arrancando los torniquetes en confrontaciones a golpes con los transportistas, quienes finalmente se fueron al paro.
- Por último, el régimen que perdió el respaldo del partido político auspiciado por el movimiento indígena, buscó sembrar el caos y la división en las comunidades, exasperando a las organizaciones indígenas.

Esta estrategia de contrarrestar los desacuerdos alimentando más desacuerdos, ha sido diseñada desde el ministerio de Bienestar Social, dirigido por un ex presidente de la CONAIE expulsado del movimiento indígena, Antonio Vargas, y por un abogado con hambre de notoriedad política, inescrupuloso al momento de movilizar sectores campesinos atraídos por algún ofrecimiento de miseria (una comida o la amenaza de suprimir el desayuno escolar para que viajen a Quito a manifestarse en las calles), Bolívar González. Esta misma pareja de funcionarios ha emprendido, en las últimas semanas, contra las fundaciones sociales, llegando incluso a intervenir de manera totalmente ilegal y dictatorial en una de ellas, la Fundación Mariana de Jesús, creada por la congregación de jesuitas hace

más de medio siglo y con una historia importante de acción en beneficio de sectores urbano marginal. Si bien, al momento de redactar estas líneas dicha intervención está neutralizada, no se pueden descartar nuevos intentos en otros sectores.

Esta actitud ilegal del ministro y su subsecretario, se ha reproducido en varios frentes; uno de los conflictos más frecuentes en estos meses ha sido, precisamente, el protagonizado por este ministerio con grupos de madres de familia pobres y con promotores sociales por desvíos frecuentes de los recursos dedicados a mantener los programas de asistencia social, para dirigirlos a satisfacer clientelas políticas del gobierno.

## **La confrontación con el TLC**

Mucho se ha afirmado y denunciado en torno a los peligros que encarna el TLC y sus muy relativos beneficios, tratándose, no de una integración, sino de un acuerdo de mercado que paradójicamente va mucho más allá que la apertura comercial, un acuerdo entre desiguales.

Podríamos sintetizar muy brevemente algunos aspectos del TLC que han sido cuestionados por la izquierda y el movimiento social:

1. Los capitales transnacionales serán tratados como si fuesen capitales nacionales, además de las ventajas de exportar utilidades, tecnología, costos de asesorías. Al mismo tiempo, no podrán ser intervenidos por el Estado nacional ni objetados sus negocios, incluso si afectaren al medio ambiente, a riesgo de someterse, el Estado, a un juicio ventilado en tribunales internacionales por interferir en la libertad empresarial. Considerando que no hay capitales nacionales, el TLC es un beneficio de una sola vía a favor de los capitales transnacionales.
2. Una clara constatación es que los seres humanos no entran en los acuerdos de libre tránsito. No hay medidas con respecto a la emigración, a pesar de que, insistimos, el TLC no afecta exclusivamente a las relaciones comerciales sino que involucra al ordenamiento jurídico, al proyecto nacional y a la cultura. Para los gobiernos del Norte, los hombres y las mujeres del Sur somos virtuales portadores de terroristas en nuestras entrañas.
3. Uno de los temas principales del TLC, con respecto a su incidencia en los niveles de pobreza y desempleo, es el referido a la agricultura. Según el TLC, las exigencias norteamericanas son las de entrar a competir "de igual a igual" con los alimentos de producción local, a pesar

de contar con enormes subsidios en los EE.UU., y un apoyo tecnológico que les concede ventajas inalcanzables en comparación con la producción nacional. Y los subsidios norteamericanos favorecen, precisamente, a los productos que el Ecuador debería mantener con protección: trigo, maíz, arroz, grano de soya, azúcar, leche, aves.

4. La soberanía es, naturalmente, un fuerte obstáculo para el TLC, que tiene que ocuparse de debilitar todos los controles y los límites establecidos a nombre de ella. El Estado ecuatoriano perderá toda posibilidad de establecer un control sobre la presencia de los capitales transnacionales. En México, el Estado debió pagar una millonaria indemnización a una empresa que quiso convertir al pueblo de San Luís de Potosí en un depósito de materiales radioactivos.
5. El discurso de los negociadores del TLC tiene un arma: el Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, o ATPDEA, ese conjunto de “concesiones” arancelarias de los Estados Unidos hacia los países andinos, a nombre del combate al narcotráfico y que fenecen en el año 2006. “¡Cuidado con oponerse al TLC porque vamos a perder el ATPDEA!” nos dicen constantemente. Sin embargo, hablando en cifras, el ATPDEA significa una pérdida para las aduanas norteamericanas de solamente 20 millones de dólares. La amenaza de privarnos del ATPDEA puede también convertirse en un boomerang contra el TLC, pues estamos frente a un chantaje y a una presión económica sobre nuestro país, lo cual va contra los acuerdos internacionales como la Carta de la OEA.
6. El modo cómo se negocia el principio de la propiedad intelectual, puede acarrear graves consecuencias sobre el dominio de las comunidades indígenas en cuanto al uso de la biodiversidad. Se imponen los derechos individuales o empresariales sobre los colectivos.
7. El TLC requiere un gran debate, pero los negociadores están manejando el tema como si se tratara de una partida de póker: manteniendo en secreto el juego. Por ello el planteamiento de una consulta popular, que ha sido cuestionada a nombre de las complejidades técnicas del TLC. Pero no se trata de poner a votar todo el enredado tejido trazado durante las negociaciones, sino los conceptos básicos y determinantes.

## Lo que enmascaran las cifras

Habíamos señalado que, durante el desorden y la improvisación que caracterizan al gobierno de Lucio Gutiérrez, es posible identificar una sola política económica desde el inicio del gobierno, que ha sobrevivido gracias a su profunda vinculación con los mandatos de las instituciones multilaterales que establecen las formas de comportamiento de la macroeconomía en nuestros países. Pero algo más: ha sobrevivido por efectos de una coyuntura económica favorable marcada por los altos precios del petróleo y una afluencia de recursos por remesas de los emigrantes, que han permitido a las autoridades económicas aplicar su “plan FMI”, sin encontrar como respuesta una reacción social, pues el efecto sobre distintos sectores sociales ha sido contrarrestado por el ingreso de las remesas enviadas por los emigrantes. Pero esta supuesta “estabilidad” de las políticas económicas tiene un límite, no es impermeable al conflicto político, sufre ya por su causa en estos días de marzo-abril de 2005, el lento abandono de sus padrinos internacionales.

Por lo demás, las cifras ocultan verdades, y lo ocurrido en la economía durante el año 2004 puede leerse de dos maneras: con triunfalismo, si se miran exclusivamente las cifras macroeconómicas y en base a ellas se establecen conclusiones que no se detienen en las inconsistencias e injusticias sociales que ocultan. O de lo contrario, con preocupación, si nos detenemos en la composición interna de las cifras y en lo que ocurre en realidad con los sectores más vulnerables de la sociedad.

En cuanto a la primera lectura, se ha vuelto moneda corriente justificar los procesos económicos provocados por la ortodoxia, que de todos modos tienen que existir ganadores y perdedores, con la reiterada coincidencia de que perdedores y ganadores siempre son los mismos, los pobres por un lado y los ricos por otro lado. Es el mismo argumento usado por los defensores del TLC, cuando no encuentran una salida a cuestionamientos que no tienen respuesta: el impacto del tratado sobre las economías campesinas.

Intentaremos rescatar algunos hechos económicos confrontando las dos lecturas, y nos apoyaremos para el efecto en el “Análisis de Coyuntura Económica” correspondiente a 2004, preparado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, cuya lectura que recomendamos desde ya:

Según los datos oficiales, el Producto Interno Bruto, PIB, pasó de 27.201 millones de dólares en 2003 a 30.282 en 2004. Sin embargo, no estamos frente a un proceso consistente de incrementos del PIB. En efecto, han existido, en los últimos años, flujos y reflujos: la tasa bajó entre 2001 y 2003,

para volver a subir en el 2004 al 6,6 por ciento, y nuevamente descender en el 2005 a un proyectado 3,9 por ciento.

Si se desagrega el crecimiento experimentado en 2004, vamos a encontrarnos que ese 6,6 por ciento se debe exclusivamente al incremento del precio internacional de un producto, el petróleo; mientras otros rubros muestran, incluso, un decrecimiento. Por ejemplo, de los tres mil millones de dólares que fue el crecimiento entre 2003 y 2004, 1,5 mil millones corresponden a petróleo; mientras el PIB correspondiente a la agricultura presenta en los últimos años un estancamiento con tendencia a la baja.

El sector industrial ha crecido en 2004 un 5 por ciento, cuando el petróleo lo ha hecho en un 25 por ciento. Y si estas cifras no son suficientemente convincentes, está el desempleo que, en una economía con un crecimiento del 6,6 por ciento debía haberse reducido, cuando al contrario, se ha incrementado en los dos últimos años del ocho por ciento al 11 por ciento, incluso contando con el flujo migratorio que debería provocar una disminución del desempleo.

Otro tanto ocurre con la inflación. Si bien el año 2004 cerró con alrededor del dos por ciento, porcentaje conforme a estándares internacionales, los costos de rubros como alquileres, agua, electricidad, gas se han inflado en un 6,15 por ciento; y la educación ha vivido un incremento de costos del 12,78 por ciento.

En cuanto a los salarios, se afirma que existe una recuperación del salario mínimo, que ha pasado de 158 dólares en 2003 a 166 dólares en 2004; sin embargo, aún no recuperan los niveles existentes antes de la crisis de 1998-99, cuando el salario mínimo andaba por 192 dólares.

El caso más escandaloso en cuanto al engaño de las cifras, es lo que ocurre con el presupuesto nacional. El constante déficit que presenta, y que justifica políticas de ajuste y de recorte principalmente del gasto social, responde fundamentalmente al costoso servicio de la deuda externa. Si no se considera este rubro, vamos a encontrarnos con que los ingresos del Estado superaron a los egresos en un dos por ciento. Actualmente, el monto asignado a la amortización y pago de deuda externa ha sido elevado hasta el 47 por ciento del presupuesto, además de que, en función de una ley con el nombre eufemístico de “responsabilidad y transparencia en el manejo fiscal”, establece que el 70 por ciento de los ingresos por excedentes petroleros se dediquen a la recompra de deuda externa. Si el precio calculado del barril de petróleo para efectos del presupuesto de 2004 se calculó en 18 dólares, y en 28 para 2005, es posible concluir que existe un importante margen de excedentes con los precio que han llegado a cuarenta dólares y más el barril. Sólo un 10 por ciento de los excedentes se dedica al gasto social, e incluso esta suma tan baja no llega a entregarse en su totalidad.

Todo este juego de cifras, y particularmente los volúmenes de recursos recaudados con los altos precios del petróleo, se gastan de manera poco transparente y responsable.

Estos hechos hacen que las supuestas ventajas de un incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales, no signifiquen, en absoluto inversión social, una de las más bajas del continente.

Esta situación tiende a agravarse, por una contracción del gasto en educación y salud del 30 por ciento; y en el caso del desarrollo agropecuario, de un 50 por ciento, durante el año 2004. En efecto, el gasto en educación descendió de 694 millones en 2002 a 464 millones en 2004, en salud pasó de 259 millones en 2002 a 211 millones en 2004; y de 137 millones a 71 millones, en el mismo período, en cuanto a desarrollo agropecuario.

Si observamos el resultado del comercio exterior ecuatoriano en el año 2004, volvemos sobre el mismo problema: el espejismo de las cifras groseramente agregadas. Se habla de un incremento de las exportaciones en un 25 por ciento; sin embargo, el 62 por ciento corresponde al petróleo, mientras las exportaciones no petroleras han caído en un 3 por ciento.

Finalmente, otro de los sonados “éxitos” del año, el incremento de los depósitos en la banca privada y el crecimiento de las utilidades debido al mantenimiento de altas diferencias entre tasas pasivas y tasa activas, se desinfla si constatamos que, antes de la crisis de 1998-99, los bancos entregaban en crédito cerca del 100 por ciento de sus captaciones, mientras hoy entregan el 65 por ciento, porque prefieren guardar liquidez en tiempos de incertidumbre económica.

Desde la cúpula del ministerio de Economía, se ha anunciado que la bonanza ecuatoriana y su reinserción en los mercados de capital internacionales se demuestra con la apertura a nuevos endeudamientos del país. Cuánta paradoja: la demostración de que avanzamos es que podemos endeudarnos más, depender más, ponernos nuevas sogas al cuello. Política de endeudamiento que, desde la vigencia de la nueva Constitución de 1997 se aplica a criterio exclusivamente del ministro de Economía, pues el Congreso perdió toda facultad sobre dicha política pública.

Este último aspecto, la necesidad de vigilar esta peligrosa discrecionalidad del régimen para endeudarse, es uno de los objetivos principales que llevó al Grupo de Trabajo “Cooperación y Desarrollo” (conformado por las ONG ACJ, CAAP, CIUDAD, CEPAM, CESA, FEPP y FURARE) a encargar al Comité Ecuménico de Proyectos, la creación y gestión de un Observatorio sobre la Cooperación (ver su último boletín, número 7, febrero de 2005, en: [www.cooperacion.org](http://www.cooperacion.org)); además de que es materia de las constantes denuncias por parte de Jubileo 2000, con sede en Guayaquil.

## **Una conclusión**

En síntesis, el segundo semestre del año 2004 ha estado poblado de equívocos en cuanto a la coyuntura política y en cuanto a los resultados económicos. Hay un país democrático imaginario profundamente afectado por una realidad intolerante. Hay un país económico imaginario que sigue favoreciendo a las cifras macroeconómicas y a la injusticia económica que encarnan. Y en el fondo, la debilidad de movimientos sociales contagiados de los juegos políticos del poder y que no encuentran la forma de trazarse una agenda propia.

Todo ello deja abierto un panorama incierto frente al futuro inmediato. Es de suponer que la incertidumbre dará paso a negociaciones políticas que no modifiquen la crisis y a una postergación de soluciones más o menos certeras del actual impasse institucional y constitucional. Entre tanto, los intentos del gobierno por hacer aprobar un paquete de reformas legales que continúen restándole espacios de acción al Estado y de cierto control social de áreas estratégicas, no van a concretarse; los intentos por avanzar en el Tratado de Libre Comercio van a vivir serios obstáculos, tanto en la negociación con los Estados Unidos como en la aprobación por parte del parlamento norteamericano y ecuatoriano; el gobierno, gracias a la situación de los precios del petróleo, avanzará en sus intenciones de mayor endeudamiento interno y externo; y se irá profundizando la articulación del país a la estrategia conjunta del régimen colombiano y norteamericano del Plan Colombia, con un paso sumamente preocupante anunciado en estos días: la apertura de otro enclave a la intervención norteamericana, además de la Base de Manta: la entrega al control norteamericano de un importante aeropuerto en la Amazonía, en la población de Tena, para las supuestas acciones de combate al narcotráfico, detrás de las cuales se oculta la guerra civil colombiana.